

Instituciones / Informe crítico

‘El dardo en la Academia’ defiende que la RAE merece una auditoría

Silvia Senz y Montserrat Alberte reúnen una rigurosa antología de artículos críticos

MATÍAS NÉSPOLO / Barcelona

La sospecha se instala en cualquier hispanohablante suspicaz cuando lee con atención lo que pone y lo que calla una inocente entrada al *Diccionario de la Real Academia Española* (DRAE) como matrimonio. Sospecha que en la redacción del lema pesan más los criterios ideológicos que lingüísticos. Pocos saben que el artículo 36 de los reglamentos vigentes de la Real Academia Española (RAE) dice: «Las Juntas Ordinarias se comenzarán con la antifona y oración acostumbradas (...) Dirigirá el rezo el Académico que presida». Sin embargo, cuando se le pregunta a ese mismo hispanohablante cuál es la máxima autoridad de su lengua, responde la RAE sin rechistar.

Quienes conocen muy bien el trasfondo ideológico de la institución son las filólogas y profesionales de la lengua Silvia Senz y Montserrat Alberte. «La RAE es una entidad tradicionalmente nepótica, machista, prepotente, nacionalista, conservadora, católica, clasista...», dicen. «El prestigio y el ascendente social de la institución no se corresponden con la consistencia de su producción normativa», añaden. Y pese a ello «ha arraigado en la sociedad como un cáncer» por razones económicas y geopolíticas: «La RAE está incrustada en las estructuras del poder público y privado y deriva de ellas su autoridad», explican.

Senz y Alberte son editoras y coautoras de *El dardo en la Academia. Esencia y vigencia de las academias de la lengua española* (Melusina), una demoledora antología que reúne en dos volúmenes los trabajos críticos de 16 especialistas e investigadores. En rigor no se trata de dardos, sino de artillería pesada, pero los proyectiles vienen forjados en 1.400 páginas de análisis riguroso y documentado, con prólogo de Màrius Serra. En teoría la diana está en el conjunto de academias de la lengua española, americanas y filipinas incluidas, pero ya que la subordinación a la RAE es casi completa y su rígido poder verticalista, incuestionable, la institución española se lleva la mayoría de páginas. Primer aspecto que desmiente su pretendida política de apertura de las últimas dos décadas: «El supuesto acuerdo y trabajo en pie de igualdad entre todas las academias de la política panhispanica es falso» denuncia Alberte, «¡si algunas academias americanas son simples sucursales: una oficina con un fax!». «Cuando llega a Madrid el trabajo americano puede ir a parar directamente a la papelera o ser aceptado en parte o negociado a cambio de una contrapartida», añade. Por lo visto, si algo no tolera la RAE es que las colonias le salgan respondoñas. «Esa subordinación sin consenso se vio en la última polémica ortográfica, en la que se dice que tuvo que salir García de la Concha a cuadrar a los académicos



José Manuel Blecuá, actual director de la RAE. / ALBERTO CUÉLLAR

«La RAE es nepótica, machista, conservadora, católica, clasista...», se quejan

«El ascendente social de la RAE va de la mano de su lucro económico», añaden

Recibió en 2010 de los presupuestos del Estado cerca de 3,9 millones de euros

cos discolos», apunta Senz.

Y no es para menos, porque «hay mucho en juego: el valor estratégico, económico y geopolítico del español

lo se instaló como autoridad idiomática, sino que se enriqueció gracias al monopolio de estos libros de texto», apunta la investigadora. Y desde entonces, poco ha cambiado, porque la institución sigue teniendo el apoyo del poder, la misma esencia uniformadora, y rindiendo beneficios en ambas orillas. «El ascendente social de la RAE va de la mano del lucro económico», dice Senz. Sólo un dato: la 22ª edición del DRAE vendió 400.000 ejemplares en los primeros seis meses de publicación en 2011.

Y al negocio editorial se suman la financiación pública y la privada: de los presupuestos del Estado, la RAE recibió, en 2010, 3,9 millones de euros, además de las partidas anuales y especiales de todas las administraciones; y aunque de los insondables aportes de sus benefactores privados «se sabe lo poco que publican», su presupuesto base ya ascendía a 2,2 millones en 2002, «y a eso se añaden las dotaciones por convenio particular y los cupos de cada benefactor», dice Senz. «Una ingente cantidad de dinero y de medios inversamente proporcional», apostilla Alberte, «a la calidad y la disponibilidad de su obra normativa y de sus recursos en línea. Hay en la red dos interfaces de búsqueda en el DRAE, realizadas sin ánimo de lucro por un maestro rural y por un programador, que son muchísimo mejores que los que ofrece una Academia que sólo parece interesada en el dinero. La RAE merece una auditoría», fustiga.

Como si esto fuera poco, *El dardo en la Academia* no sólo cuestiona «la metodología de trabajo y la concepción de la lengua de la RAE por obsoletas», dicen, sino que da sobrados ejemplos de cómo estas instituciones «obstaculizan la divulgación de la ciencia lingüística y el desarrollo de la terminología en español y de las tecnologías de la lengua». La RAE es, para las autoras, ante todo «manipuladora» y «deshonesta» en su proceder. «Promueve mitos lingüísticos, como el de la existencia de una lengua correcta que sólo la RAE conoce y establece, y por medio de esta falacia se consagra como encarnación de la lengua verdadera y apunala la subordinación de los hispanohablantes a su autoridad», explica Senz. «Para cultivar esta imagen de omnisciencia nunca publica sus fuentes bibliográficas, pero expolia la obra ajena sin miramientos», enfatiza. Es célebre el uso de la obra de Manuel Seco para el *Diccionario panhispánico de dudas*: algún académico llegó a acuñar jocosamente el verbo «manuelsaquear».

Sin embargo, «el libro no acaba aquí, porque las academias son entidades nocivas incluso para sus patronos», dicen las autoras y amenazan con un tercer volumen que complete los análisis lexicográficos y tecnológicos que han quedado en el tintero. La polémica no ha hecho más que comenzar.

Museos / Estrategia

BCN promueve un pacto sobre sus prioridades culturales

Barcelona

Mucho se están removiendo las políticas culturales para Barcelona en los últimos meses, aunque los recortes provocados por la crisis económica sean sólo una de las causas (y no, precisamente, la principal). El motivo de tanto amago de cambio hay que buscarlo en que, ahora, tanto Ayuntamiento como Generalitat como Diputación de Barcelona están en manos de Convergència (en la Diputación, junto al PP) y, también, en las diferencias (más o menos amplificadas, según quién las explique) entre el responsable de la cultura municipal, Jaume Ciurana, y el conseller de Cultura, el hasta hace poco socialista, Ferran Mascarell.

Pese más o menos al color de los nuevos políticos o el *tijeretazo* perpetrado —y el que falta por perpetrar— lo cierto es que se están removiendo los cimientos de varios equipamientos centrales en el diseño cultural de la ciudad, básicamente en el terreno del arte contemporáneo. Y ésa es una de las razones por las que el socialista Jordi Martí, quien fuera responsable de las políticas municipales hasta hace sólo unos meses en el Ayuntamiento socialista, entrara al pleno una propuesta para llegar a un pacto cultural para la ciudad, propuesta que ayer fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas (hay que recordar que el *popular* Alberto Fernández Díaz había entrado una proposición similar sólo unas semanas antes).

El pacto cultural deberá contemplar un acuerdo unánime, en un plazo de seis meses, de los grupos municipales que fije las prioridades y los compromisos del Ayuntamiento de Barcelona en los equipamientos y programas culturales de la ciudad en los que se compartan responsabilidades con otras administraciones. También promoverá un acuerdo con las otras administraciones públicas que asigne y revise responsabilidades en los consorcios, establezca nuevas actuaciones conjuntas y garantice el desarrollo cultural de Barcelona.

Según el quinto teniente de alcalde, Jaume Ciurana, «Barcelona disfruta de una serie de equipamientos culturales en los que la responsabilidad de su gestión está compartida con otras administraciones y hay que trabajar para mejorar su gestión, establecer liderazgos y garantizar la financiación. Es objetivo de todos aprovechar al máximo su potencial». El hipotético pacto —falta que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo— daría más fuerza a Ciurana cuando se produzca un choque de estrategias con la Generalitat.